

Tal y como recoge la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley, Eurojust se creó mediante la Decisión 2002/187/JAI del Consejo como un organismo de la Unión con personalidad jurídica, para estimular y mejorar la coordinación y cooperación entre las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros, en particular en relación con casos graves de delincuencia organizada. Tras la modificación operada por el Tratado de Lisboa, el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) previó que Eurojust se rigiera conforme a un reglamento. Dicha previsión se ha cumplido mediante la aprobación del Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, que es de directa aplicación desde del 12 de diciembre de 2019. Con el nuevo reglamento, Eurojust ha pasado de ser una unidad de cooperación a convertirse en una agencia.

El Anteproyecto sometido a Informe tiene por objeto la adaptación del ordenamiento interno al citado Reglamento (UE) 2018/1727, lo que implica derogar la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior, norma derogó en su día la Ley 16/2006, de 26 de mayo.

La ley consta de cinco capítulos, una disposición adicional, una disposición derogatoria, y cuatro disposiciones finales. El Capítulo I, de acuerdo con la Exposición de Motivos, es descriptivo del contenido de la ley; el Capítulo II recoge el contenido de los antiguos capítulos I a IV perfilando exclusivamente las medidas indispensables exigidas por el reglamento y sustituyendo aquellas que quedan desplazadas por la eficacia directa de la norma europea. En este se recoge la forma de selección y nombramiento de los candidatos a los cargos de miembro nacional de España en Eurojust, de adjunto y de asistente. Y el resto de los capítulos relativos a conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior se mantienen en los términos de la Ley 16/2015, de 7 de julio.

Pues bien, para el análisis de la norma desde el punto de vista de la regulación de protección de datos hay que partir, como establece el Reglamento (UE) 2018/1727, del objetivo del Reglamento y la consideración de Eurojust como un organismo de la Unión Europea, lo que determinará la normativa de protección de datos a aplicar.

Eurojust, como se ha mencionado, se constituye como una Agencia de la UE (art. 1 Reglamento), cuyas funciones son (art. 2) apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir las formas de delincuencia grave para la que Eurojust sea competente cuando dichas formas de afecten a dos o más Estados miembros o deban perseguirse según criterios comunes, basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros, por Europol, por la Fiscalía Europea y por la OLAF. Se trata pues de actividades destinadas, en general, a la investigación y persecución de delitos.

Eurojust, como tal Agencia de la UE, está sujeta a la normativa de protección de datos específica para las instituciones de la UE en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE. Este Reglamento (UE) 2018/1725 contiene un Capítulo IX dedicado al tratamiento de datos personales operativos por los órganos y organismos de la Unión cuando llevan a cabo actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 o 5 del Título V de la tercera parte del TFUE, que hacen referencia, el Capítulo 4 a la Cooperación judicial en materia penal y el Capítulo 5 a la Cooperación policial.

El Considerando 29 del Reglamento (UE) 2018/1727 de Eurojust especifica que las normas generales contempladas en el correspondiente capítulo del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) sobre el tratamiento de datos personales operativos (para organismos de la UE) deben aplicarse sin perjuicio de las normas específicas sobre protección de datos contenidas en el Reglamento de Eurojust. Estas normas específicas deben considerarse como *lex specialis* en relación con las disposiciones del mencionado capítulo del Reglamento (UE) 2018/1725 (*lex specialis derogat legi generali*). A su vez el Considerando 28 del mismo Reglamento de Eurojust dice que la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo establece normas armonizadas para la protección y libre circulación de datos personales tratados con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención. A fin de garantizar el mismo nivel de protección de las personas físicas mediante derechos protegidos jurídicamente en toda la Unión y evitar divergencias que dificulten el intercambio de datos

personales entre Eurojust y las autoridades competentes de los Estados miembros, las normas para la protección y la libre circulación de datos personales operativos tratados por Eurojust **deben ser coherentes con la Directiva (UE) 2016/680**.

Eurojust, conforme al art. 6 de su Reglamento, se compone de: Eurojust comprenderá: a) los miembros nacionales; b) el Colegio; c) el Consejo Ejecutivo; y d) el director administrativo. El Reglamento UE 1727/2018 regula el estatuto de los miembros nacionales de Eurojust, en los que incluye al adjunto y al asistente, cuya designación (que no sus funciones) el Reglamento 1727/2018 difiere a los Estados miembros (art. 7.6). Por tanto, el miembro nacional, el adjunto y el asistente forman parte de Eurojust. Sus funciones están recogidas en el art. 8 y 9 del Reglamento. Los tratamientos de datos operativos que realicen en el ejercicio de sus funciones están regulados, por lo tanto, por el Capítulo IV del Reglamento (UE) 1727/2018, cuyo art. 26, apartado 1 y 2, especifican:

Tratamiento de datos personales por Eurojust

1. El presente Reglamento y el artículo 3 y el capítulo IX del Reglamento (UE) 2018/1725 se aplicarán al tratamiento de los datos personales operativos por Eurojust. El Reglamento (UE) 2018/1725, excepto su capítulo IX, se aplicará al tratamiento de los datos personales administrativos por Eurojust.

2. Las referencias en el presente Reglamento a las «normas aplicables en materia de protección de datos» se entenderán como referencias a las disposiciones de protección de datos establecidas en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) 2018/1725.

Consecuente con lo anterior, el art. 40 del Reglamento (UE) 1727/2018 establece que corresponde al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) *supervisar y asegurar la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento (UE) 2018/1725 relativas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas **en lo que respecta al tratamiento de los datos personales operativos por Eurojust**, y de asesorar a Eurojust y a los titulares de los datos sobre todos los asuntos relacionados con el tratamiento de los datos personales operativos. A tal fin, el SEPD cumplirá las obligaciones que le incumben en virtud del apartado 2 del presente artículo, ejercerá los poderes que se le confieren en virtud del apartado 3 del presente artículo y cooperará con las autoridades nacionales de supervisión de conformidad con el artículo 42.*

No correspondería por lo tanto a esta AEPD las funciones de supervisión sobre los tratamientos de datos personales operativos realizados por el miembro nacional de España en Eurojust (incluyendo adjuntos y asistentes), sino al SEPD. Dado que el Reglamento (UE) 1727/2018 tiene efecto directo, esta sujeción de los tratamientos de datos personales por el miembro nacional

(y adjuntos y asistentes) a la normativa citada no requiere reiteración en el anteproyecto de ley.

Cabe mencionar, y tener presente, que el art. 45.2.b) del Reglamento (UE) 2018/1727 establece la responsabilidad del Estado Miembro sobre la exactitud de los datos personales operativos transmitidos a Eurojust cuando los datos presentados no se modificaran durante el tratamiento de los datos por este último.

II

Los tratamientos de datos personales realizados por organismos o personas reguladas en el Anteproyecto que no sean miembros nacionales de Eurojust, habida cuenta de que nos encontramos -como ya se ha mencionado- ante actividades destinadas a *apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir las formas de delincuencia grave para la que Eurojust sea competente* estarán sujetos a la **Directiva (UE) 2016/680** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (Directiva 2016/680).

Así, por ejemplo, los tratamientos de datos que lleven a cabo los corresponsales nacionales de Eurojust (que no forman parte de Eurojust) o en el seno del sistema de coordinación nacional de Eurojust (art. 17 del Anteproyecto y 20 del Reglamento (UE) 1727/2018) o las autoridades nacionales competentes (jueces, fiscales, fuerzas de seguridad) estarán sujetos en sus tratamientos de datos relacionados con estas funciones a la citada Directiva 2016/680.

Dicha Directiva está sujeta a la necesidad de su transposición en España. En la actualidad está en tramitación en las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales (121/000046).

No obstante, la Disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) regula, mientras no se transponga dicha Directiva 2016/680, los tratamientos sometidos a la misma, regulándose estos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (LOPD):

*Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, **continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en particular el artículo 22, y sus disposiciones de desarrollo, en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva.***

El Informe de esta AEPD 241/2014 analizó en su momento la adaptación de la normativa nacional (en la redacción entonces propuesta en el Anteproyecto) a la anterior regulación de Eurojust de conformidad con la AEPD.

El artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, el artículo 11.2 a) habilita la cesión de los datos sin contar con dicho consentimiento en caso de que la misma se ampare en una norma con rango de Ley y el artículo 11.2 d) la autoriza “cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”.

Ciertamente, las cesiones y tratamientos previstos encontrarían precisamente cobertura en el hecho de hallarse recogidas expresamente en una norma con rango de Ley, no obstante, debe recordarse que esta Agencia ha puesto reiteradamente de manifiesto que la mera adopción de una norma con rango de Ley no puede considerarse por sí sola como habilitante de un tratamiento o cesión, sino que debería analizarse si la mencionada previsión propuesta resulta conforme y respetuosa con el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, consagrado por el artículo 18.4 de la Constitución. En este sentido, si bien es cierto que la Ley puede, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, establecer causas específicas legitimadoras del tratamiento de los datos de carácter personal sin que se haga preciso en tales supuestos recabar el consentimiento de los afectados, debe tenerse en cuenta que tales limitaciones deberán en todo caso resultar respetuosas con el contenido esencial del derecho fundamental, conforme exige el artículo 53.1 de la Constitución.

El Informe de esta AEPD, en definitiva, examina las funciones de Eurojust y las competencias de los distintos órganos o corresponsales nacionales reguladas en el texto y los tratamientos de datos que se desprenden de dichas funciones y llega a la conclusión de que (...) *“cabe concluir que los tratamientos de datos que prevé el Anteproyecto sometido ahora a informe serán lícitos en cuanto se derivan de las finalidades previstas y son a su vez necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas a Eurojust, especialmente a través de sus miembros nacionales”* (...).

La misma conclusión cabe alcanzar ahora respecto de la regulación contenida en el Anteproyecto presentado a informe en relación con el Reglamento (UE) 2018/1727, a la vista de las competencias y funciones que se establecen en este último. Ello sería, por otra parte, coherente con la regulación contenida en el art. 8 de la Directiva 2016/680, por cuanto la licitud de los tratamientos de datos reguladas por esta requiere, en todo caso, (i) *que sea necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1*, y (ii) *esté basado en el Derecho de la Unión o del Estado miembro*.

No obstante lo anterior, y aunque la Directiva 2016/680 aún no se ha transpuesto, el apartado 2 del art. 8 citado establece que: *El Derecho del Estado miembro que regule el tratamiento dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, deberá indicar al menos los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento*. En desarrollo de lo anterior, el artículo 9.2 del Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, actualmente en tramitación en las Cortes, señala que *Cualquier ley que regule tratamientos de datos personales para los fines incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley orgánica deberá indicar, al menos, los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento*. **Por ello se sugiere que, respecto de los tratamientos de datos personales regidos en el Anteproyecto de Ley por dicha Directiva 2016/680, se indiquen, al menos, los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento.**